

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora, por el C. Andres Fenochio y otros, contra la aplicacion del impuesto decretado por el Gobierno de dicho Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que habiendo examinado detenidamente este juicio de amparo, promovido por los empleados federales de la Aduana marítima, no encuentra razones ni fundamentos legales para poder apoyar esa solicitud, y sí al contrario el que se lleve á efecto las cuotas que respectivamente se les han designado en el pago de la contribucion extraordinaria decretada por el Gobierno del Estado en 6 del próximo pasado mes. El artículo 61 fraccion 2ª de la Constitucion federal, impone la obligacion á todo mexicano de contribuir para los gastos públicos así del Estado como de la Federacion y Municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que designan las leyes. Esto está conforme con lo que previene la Constitucion del Estado en la fraccion 2ª de su artículo 33. Y siendo esta una de las atribuciones del poder Legislativo del Estado, de acuerdo con la fraccion 9ª del artículo 67 de su Constitucion, como el de poder transmitir esas facultades al Ejecutivo, fraccion 17 del mismo artículo, este, investido de facultades extraordinarias en guerra y hacienda, ha estado en su perfecto derecho al decretar esa contribucion extraordinaria y en la obligacion todo mexicano ó extranjero de pagar la cuota que se les haya asignado por las juntas que expresa el referido decreto de 6 del pasado mes.

Por todo lo ya expuesto y de acuerdo con la circular del Ministerio de Hacienda de 21 de Marzo del año próximo pasado, el que suscribe no puede menos que pedir á

ese Juzgado, que resuelva que no ha lugar al amparo que se solicita por los CC. Andres Fenochio, administrador; Francisco Schober, contador; Plutarco Elías, oficial 1º; H. Gabilondo, comandante de Celadores y Miguel García, vista de esta Aduana marítima, como el Capitan de Puerto David Spense, del cobro que se les exige en la parte que á cada uno les corresponde pagar por la contribucion extraordinaria del ya referido decreto expedido por el Ejecutivo del Estado, en virtud de las facultades extraordinarias dadas por la Legislatura del mismo. Protesto &c.

Guaymas, Noviembre 7 de 1873.—*Lic. José Monteverde.*

Es copia de su original que certifico.

Guaymas, Diciembre 5 de 1873.—*José Monteverde.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Noviembre 28 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo, promovido por los CC. Andres Fenochio, administrador de la Aduana marítima de este Puerto; Francisco Schober y Plutarco Elías, el 1º contador y el 2º oficial 1º internos de la propia oficina; Hilario Gabilondo, comandante de Celadores; Miguel García vista de la misma Aduana, y David Spense capitan de Puerto, contra la aplicacion del decreto del Gobierno del Estado de 6 de Octubre próximo pasado, que impuso una contribucion extraordinaria de \$35000 .. centavos, á todos los habitantes del mismo, cuyo capital efectivo, renta ó emolumento anual, pasase de mil pesos, por considerar violadas los quejosos con tal disposicion las garantías individuales que les aseguran los artículos 4º y 14 de la Constitucion general, é invadida la esfera del poder federal, por ser facultad esclusiva del Congreso de la Union, hacer alteraciones en los sueldos de los empleados de la federacion, segun el artículo 72 fraccion XI del citado Código

fundamental; el informe de la autoridad encargada de la ejecución del acto reclamado el pedimento fiscal relativo, con cuantía mas de autos consta y Considerando:

Primero: que el Estado de Sonora, como los demas de la República, es soberano en su régimen interior, y como tal debe tener los medios de proveer libremente á su conservación así en tiempos normales como en circunstancias de conflicto ó perturbación del orden establecido, pudiendo en consecuencia decretar los impuestos tanto ordinarios como extraordinarios, suficientes al objeto, á juicio del poder público.

Segundo: que si en la delegación frecuente al Ejecutivo de la facultad escusiva concedida á la Legislatura en el artículo 67 fracción IX de la Constitución del Estado, para decretar contribuciones que cubran los gastos públicos, ha habido prodigalidad y acaso hasta una errónea inteligencia de la fracción XVII del artículo citado, la justicia federal no es competente para juzgar de esos errores, ni menos cuando el pueblo de Sonora ha sancionado con su aquiescencia la práctica uniforme de sus Congresos en el mismo sentido.

Tercero: que si el Ejecutivo del Estado, en el uso de esa facultad delegada, ha seguido en esta vez el sistema viejo adoptado en la ley de contribución ordinaria, nivelando los capitales reales y efectivos con el producto anual de los sueldos de empleados, que constituyen un capital eventual ó incierto, y dejando la designación de capital y cuotas al arbitrio de una ó de dos juntas sin base segura de que partir ni á qué sujetarse, resultando de ahí desigualdades y excesos notables en la cuotización, tales gravámenes han pesado indistintamente sobre un gran número y diversas clases de ciudadanos, y no determinadamente sobre los empleados reclamantes.

Cuarto: que los empleados federales, como todo ciudadano, están obligados á contribuir á los gastos de la Federación, del Estado y del Municipio en el lugar de su resi-

dencia, con arreglo á las leyes respectivas (artículo 31 de la Constitución general); no importando por consiguiente, la imposición de la reclamada por los peticionarios, ni la violación de la garantía consignada en el artículo 49, que es compatible con la coacción al cumplimiento de las obligaciones legales, ni de la que asegura el artículo 14; por que el sueldo anual de un empleado como producto de su empleo, que viene á ser el capital, no debe contarse del primer mes al último del año natural, sino de un mes cualquiera al duodécimo siguiente; ni la invasión tampoco de la facultad concedida al Congreso de la Unión en la fracción XI del artículo 72, por que el gravamen accidental y pasajero impuesto al empleado como contribuyente, no altera ó disminuye su sueldo en el sentido legal del artículo citado.

Quinto: que finalmente, el principal fundamento del amparo que tambien alegan en su ocurso los quejosos, concedido á los empleados federales de Tampico por el Juzgado de Distrito de Tamaulipas, contra la exacción de un impuesto semejante, fué, que la ley del Estado aplicada á aquellos, no enumeraba los sueldos de empleados entre los capitales gravados por ella, mientras que en el caso presente sucede todo lo contrario; pues expresamente se declaran contribuyentes toda profesion, industria ó sueldo que produzca al año mas de mil pesos (artículo 29 del citado decreto); con tales fundamentos y el de los artículos 101 y 102 de la Constitución general y de los 18 y 27 de la ley orgánica reglamentaria de éstos de 26 de Enero de 1869, este Juzgado, de acuerdo con la voz fiscal, falla:

La Justicia de la Unión no ampara ni protege á los CC. Andres Enochio, Francisco Schöber, Plutarco Elias, Miguel García, H. Gabilondo y David Spense, empleados todos de la Federación en este Puerto, contra la aplicación del impuesto extraordinario decretado por el Gobierno del Estado en 6 de Octubre próximo pasado.

Notifíquese; publíquese en los periódicos

y remítanse originales los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez de Distrito de Sonora así lo decretó definitivamente, firmándolo con los testigos de su asistencia ordinaria.—*D. Elias G.—A.—P. del Rincon.—A.—Pastor Rodriguez.*

Es copia de su original que certifico.

Guaymas, Octubre 5 de 1873.—*Elias G.—P. del Rincon.—Pastor Rodriguez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 6 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por los CC. Andrés Fenechio, Francisco Schober, Plutarco Elias, Hilario Gabilondo, Miguel García y David Spense, empleados de la Aduana marítima de Guaymas, ante el Juzgado de Distrito de Sonora, contra la aplicacion del decreto de 6 de Octubre del año próximo pasado expedido por el Ejecutivo del mismo, facultado por la Legislatura; que impuso una contribucion de treinta y cinco mil pesos, repartida proporcionalmente entre los vecinos del Estado, para sofocar la sublecion de Alamos, con cuyo acto, alegan los quejosos, que se infringe el artículo 72 Constitucional en su fraccion 11.

Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; lo pedido por el C. Promotor y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente; y

Considerando: que es atribucion expresa del Congreso de la Union; aumentar ó disminuir las dotaciones de los empleados de la federacion, y que al hacer extensivas las contribuciones de los Estados á estos, se invaden las atribuciones de la federacion; con fundamento del artículo citado y de los 101 y 102 constitucionales, y de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

1º Que es de revocarse y se revoca la sentencia del inferior, que declaró que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los

quejosos, contra el acto de que se quejan, y se declara:

2º Que la Justicia de la Union ampara y protege á dichos CC. contra la aplicacion del impuesto decretado por el Gobierno del Estado.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*J. M. Iglesias.—Juan J. de la Garza.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Anza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—J. Garcia Ramirez.—Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 24 de 1874.—*Ilc. Emilio Ordaz*, Oficial mayor interino.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas, por el C. Francisco Palacios, contra la providencia dictada por el Gefe político del departamento de Soconusco, por violacion de garantías.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Cristobal las Casas, Noviembre 4 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Francisco Palacios, expresando estar violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 5º y 27 de la Constitucion federal, con la providencia que el C. Gefe político del departamento de Tapachula, dictó el 20 de Mayo del corriente año, previniéndole que desembrazase el camino que conduce de la Ciu-